

Los empresarios y la política partidaria

Ricardo Tirado*

Presentación¹

ESTE ARTÍCULO ABORDA el novedoso fenómeno de la politización empresarial en México, en una de sus vertientes más llamativas: el de su creciente incidencia sobre los dos partidos más fuertes del espectro político nacional: el oficial Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el tradicional opositor de derecha Partido Acción Nacional (PAN).

Se asume en el trabajo que el empresariado mexicano ha desarrollado en los últimos años una nueva voluntad política, un nuevo discurso y nuevas estrategias de acción orientadas a fortalecer su presencia en la sociedad y su representación en el sistema político mexicano, procurándose una garantía en contra de

* Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Agradezco los comentarios críticos de Rafael Segovia y Francisco Gil Villegas.

¹ Como se dice en la introducción colectiva que antecede a este artículo, este trabajo se apoya y continúa la reflexión que sobre el tema he venido desarrollando con otros colegas. Véanse R. Tirado y M. Luna, "La politización de los empresarios (1970-1982)", en J. Labastida (comp.), *Grupos económicos y organizaciones empresariales*, Alianza Editorial Mexicana-UNAM, Biblioteca Iberoamericana núm. 6, México, 1986; M. Luna, R. Millán y R. Tirado, "Los empresarios en los inicios del gobierno de Miguel de la Madrid", *Revista Mexicana de Sociología*, año XLVII, núm. 4/85, México, octubre-diciembre de 1985; y M. Luna, R. Tirado y F. Valdés, "Businessmen and politics in Mexico, 1982-1986", en S. Maxfield y R. Anzaldúa (eds.), *Government and private sector in contemporary Mexico*, Monograph Series núm. 20, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego, 1987. No obstante lo anterior, la responsabilidad de lo que aquí se sostiene es exclusivamente mía.

toda futura afectación de sus intereses por medio de eventuales reformas oficiales.

Por otra parte se sostiene aquí que la naturaleza de la garantía que los empresarios buscan es tal que los ha conducido a los partidos políticos nacionales. De ahí su interés por implantarse en los grandes partidos y la apuesta empresarial a un futuro bipartidismo PRI-PAN.

Introducción

Los empresarios mexicanos, como no podía ser de otra manera tratándose de una clase social tan fundamental, siempre han participado en la actividad política nacional. Baste recordar que revolucionarios y políticos tan diferentes y distantes como Francisco I. Madero, Álvaro Obregón, Aarón Sáenz, Abelardo Rodríguez, Juan Andrew Almazán, Manuel Gómez Morín y Miguel Alemán Valdés conjugaron la política con los negocios. En la actualidad no son ajenos a la actividad empresarial los priístas Carlos Hank González, Jorge Díaz Serrano y Miguel Alemán Velasco ni los panistas Manuel J. Clouthier, Andrés Marcelo Sada y Pablo Emilio Madero.

Esta presencia actual tan notable de empresarios militantes no era en el pasado reciente algo tan común y evidente, pues el viejo pacto social conformado en los años treinta y cuarenta impuso algunas restricciones a la acción política válida de los empresarios. Se trata de un conjunto de reglas que pueden sintetizarse así: los empresarios podían hacer política pero al margen de los partidos, de manera cupular y secreta y enfocada ante todo a la formulación de las políticas públicas y, en menor grado, a influir en la designación de dirigentes políticos y funcionarios. Otra regla del mismo pacto establecía además que esta actividad política no debería ser nombrada como tal, sino como simples gestiones económico-administrativas, ni tampoco mostrarse y discutirse públicamente. He ahí los cauces por los cuales el tema de la actividad política empresarial se convirtió en un auténtico tabú de la política nacional.

A mediados de los años setenta, sin embargo, este viejo tabú comenzó a resquebrajarse cuando en el conflicto surgido de su oposición al proyecto reformista del gobierno del presidente Echeverría, los empresarios experimentaron el principio de importantes

cambios que comenzaron a transformarlos, politizándolos hasta el grado de desafiar la hegemonía de la burocracia política, principio fundamental del viejo pacto social.²

Vinieron luego la “tregua” solicitada por el presidente López Portillo, la política complaciente hacia el sector privado y la euforia del *boom* petrolero, que adormecieron los cambios recién iniciados en la conciencia empresarial.

Pero la nueva fase de crisis económica desatada al inicio de los ochenta y, sobre todo, la nacionalización de la banca privada tuvieron el efecto de quebrantar la alianza entre la burocracia política y los empresarios, recuperar las nuevas e incipientes formas de conciencia dormidas, y permitir la cristalización de “una nueva voluntad empresarial de poder”, que ha puesto en cuestión el histórico pacto social que desde fines de los años treinta y cuarenta ha sido sustento del sistema político mexicano.

Esta nueva voluntad de poder apunta a la promoción de una nueva hegemonía fundada en los beneficios materiales derivados de un modelo de desarrollo cuyo dinamismo provendría de la exportación de manufacturas y en los valores de una visión liberal del mundo. Una hegemonía de este corte, si fuese viable, eliminaría de raíz el peligro de que resurgiera una nueva oleada de reformismo que afectase los intereses empresariales.

Con vistas a esto el empresariado se ha propuesto fortalecer su presencia en todos los espacios de la sociedad, suministrar nuevas fórmulas políticas en torno a las cuales puedan articularse otros consensos y otra legitimidad, y a corto plazo incrementar su representación en el sistema político mexicano.

Esta novedosa voluntad política empresarial puede detectarse y seguirse empíricamente en un nuevo discurso y en una nueva acción política propiamente dicha. El primero se articula en torno a la consideración de que el modelo de desarrollo económico y político seguido por México llegó a sus límites y es preciso reformarlo. En cuanto a la profundidad de los cambios necesarios se encuentran importantes diferencias entre las principales facciones políticas empresariales, que más adelante se examinarán.

En lo económico ha predominado (no sin problemas) la opi-

² La hegemonía burocrática ya había sido seriamente cuestionada desde la izquierda, como resultado de la represión al movimiento estudiantil de 1968. Se emplea aquí el concepto de hegemonía con el sentido que Gramsci le dio: dirección consentida que reposa en unos valores y una visión del mundo ampliamente compartidos y en una participación en los beneficios materiales que la sociedad genera.

nión de los grupos empresariales más fuertes de que el modelo de desarrollo centrado en el crecimiento hacia adentro, la sustitución de importaciones y el mercado interno, está agotado porque ha perdido su capacidad de expansión.

En lo político hay un acuerdo muy generalizado de que un aspecto central de la grave problemática de México es el político. Por eso una parte muy importante de su discurso se dedica a hacer una incisiva crítica del sistema imperante. Sostienen que éste es incapaz de proporcionar la confianza imprescindible para la buena marcha y el desenvolvimiento de la empresa privada, por la excesiva discrecionalidad y concentración del poder en México, sobre todo en la institución presidencial. Ya no se trata ahora, en esta óptica, de un simple problema de personas, sino de una estructura institucional que delega en el Presidente de la República tantas facultades en tantos campos de acción que se hace imposible un cálculo racional mínimo del curso futuro de los acontecimientos. El sometimiento de los poderes legislativo y judicial al ejecutivo, la sumisión de los gobiernos de las entidades federativas al gobierno central y el casi monopolio del partido oficial, combinado con la fragilidad de los partidos políticos de oposición y la frecuente irregularidad en los procesos electorales, constituyen prácticas profundamente arraigadas que ponen en cuestión la realidad de la separación de poderes y la república democrática, representativa y federal. A esto deben sumarse, aducen, otras prácticas como el corporativismo tripartita y estatista que frecuentemente contraponen al sector privado, a los sectores público y social.

Por otra parte, agregan, estos inmensos poderes presidenciales se proyectan en el campo de lo económico en la forma de una irrefrenable tendencia a la expansión de la intervención del Estado en las actividades productivas, la imposición de regulaciones que obstaculizan “el libre juego de las fuerzas del mercado”, el otorgamiento infundado de subsidios económicos por razones políticas y muchas otras medidas “arbitrarias” que van a contracorriente de “un sano realismo”.

Todo esto, concluyen, da como resultado que la ciudadanía, los gobernados, la iniciativa privada y la sociedad civil (términos tendencialmente equivalentes en el discurso empresarial), estén a merced del enorme y concentrado poder que ejerce sin contrapesos ni balanzas el titular del ejecutivo federal.

La “docena trágica”, como han llamado a los sexenios de

Echeverría y López Portillo, dicen que muestra los “excesos populistas” de toda índole en que se incurrió entonces, la incapacidad del sistema para autorregularse y no depender de las decisiones unilaterales tomadas, en última instancia, “por una sola persona que no rinde cuentas a nadie”.

El remedio que postulan para los graves males detectados en este diagnóstico político no es otro que el llamado a toda la ciudadanía, los gobernados, la sociedad civil y muy en particular a los empresarios mismos, para que en el uso de sus legítimos derechos fortalezcan a la sociedad civil y den eficacia a las instituciones políticas democráticas que establece la Constitución, de tal modo que frente al enorme poder presidencial se yergan otros poderes que lo moderen.

Se llega así a una de las más notables novedades del discurso empresarial aparecido en los últimos años. Se trata, por una parte, de la admisión cabal de lo que consideran una necesidad de participación más enérgica en la actividad política y, por otra, del autorreconocimiento de que son actores políticos y sus actos tienen también un ineludible sentido político.³ Esto concluye con una larga tradición de acuerdo con la cual el discurso empresarial negó insistentemente que su acción social tuviera una dimensión política.

El liderazgo empresarial ha pretendido, sin embargo, atemperar las consecuencias de esta contundente asunción de la política haciendo, de acuerdo con elaboraciones más o menos complejas, una distinción entre “la política” y “lo político”, términos que se conceptualizan, respectivamente, como la lucha por el poder que pasa por los partidos políticos, en el primer caso y, en el segundo, como cualquier acción que sin procurar la consecución del poder político mismo busca influir en él para obtener un bien lícito específico o para promover “la búsqueda del bien común”.

Los empresarios, sus organizaciones y sus dirigentes han sostenido con gran ahínco que esos tres tipos de acción política son legítimos para todos los ciudadanos y, en tanto tales, para los empresarios. Para las organizaciones empresariales, en cambio,

³ Véanse dos versiones de este interesante punto en Alfonso Pandal Graf (presidente de Concamín), revista *Concamín*, núms. 747, octubre de 1982, y 752, marzo de 1983, y Emilio Goicoechea Luna (presidente de Concanaco), *La crisis y la libertad*, Concanaco, México, 1985, pp. 220-221.

sólo serían legítimas las acciones que se relacionan con “lo político”, y de ninguna manera les sería dado luchar válidamente por el poder político ni vincularse a los partidos.⁴ En cuanto al valor de esta distinción teórica, cabe decir que puede ser útil para establecer diferencias analíticas entre las formas de la acción política, pero sin desconocer que aun “lo político” es sólo una forma de la actividad política en sentido amplio y que, por lo mismo, la separación tiene un ámbito de validez limitado, en tanto que las intervenciones muy intensas en el campo de “lo político” invaden irremediamente la esfera de “la política”, eliminando la distinción. Justamente esto ha sucedido cuando las organizaciones empresariales se han involucrado en la actividad partidaria impugnando la validez de los procesos electorales al lado del PAN, la Iglesia y otras fuerzas.

Retomando entonces la distinción teórica anterior, con los límites que se le han señalado, cabe hacer la distinción analítica de tres formas de la acción política empresarial desplegada en los últimos años: la que atañe a “la política” como lucha directa y explícita por el poder (o acción “política partidaria”) y las que se refieren a “lo político” en dos subformas: *a*) como lucha en el campo ideológico-político (o acción “cívica” o “político-social”), y *b*) como presión para obtener un beneficio concreto (o acción “político-económica”). Cada uno de estos tres tipos de acción ha sido asociado a una lógica y una estrategia específicas que pueden resumirse así: la estrategia de la acción partidaria busca abrir espacios a los empresarios en el seno de los partidos políticos; la de la acción cívica procura dar lugar a una nueva legitimidad fundada en la oposición entre lo privado y lo público y en la ecuación iniciativa privada = sociedad civil; y la de la acción económica se concentra en impulsar una redefinición del corporativismo que se centra en la competencia de grupos nucleados por categorías o situaciones no clasistas y en oposiciones como la de productores-consumidores. En este trabajo sólo se trata de la acción político-partidaria.⁵

⁴ Véanse las mismas fuentes citadas en la nota 3.

⁵ Con relación a las acciones “cívica” y “económica”, véanse los trabajos de Francisco Valdés y Matilde Luna en este número.

Las facciones políticas empresariales⁶

Es evidente que el sector privado mexicano no constituye un agente social monolítico, sino que está integrado por grupos, capas, fracciones y facciones que se conforman en función de múltiples factores económicos, sociales, políticos, ideológicos, culturales, etcétera.

De todas estas articulaciones, interesa aquí aquella que pueda dar cuenta del comportamiento explícitamente político de los empresarios, el cual, pese a su diversidad, históricamente se ha manifestado en dos grandes “facciones políticas empresariales” que a lo largo de varias décadas de este siglo se han hecho muy visibles en ocasión de conflictos. Son facciones que, como todo el empresariado en general, cuando actuaban lo hacían siempre de modo eminentemente coyuntural y reactivo, de modo que en situaciones de conflicto reafirmaban su presencia y en las de paz social tendían a difuminarse hasta casi desaparecer. Desde la nacionalización bancaria las facciones políticas han reaparecido y se manifiestan cotidianamente en la escena política nacional.

Las facciones empresariales son corrientes de opinión y acción política basadas en complejas articulaciones orgánicas en las que los elementos ideológico-políticos, orgánicos y económicos tienen una importancia fundamental. Las características típicas de las dos que tradicionalmente han operado en México, son como se describen a continuación.

La facción más antigua es la “radical nortea” (en adelante simplemente radical), cuyas bases principales se concentran sobre todo en el norte y noroeste del país, aunque también tiene conexiones y extensiones en algunos estados del centro y unas pocas ciudades del sur.

Estas bases de la facción radical son muy heterogéneas en tanto que se trata de empresarios que operan prácticamente en todos los sectores y ramas de la actividad económica: agricultura, industria, comercio y servicios, y sus unidades de capital son

⁶ Sobre las facciones empresariales pueden verse: Flavia Derossi, *El empresario mexicano*, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México, 1977; Elvira Concheiro, *et al.*, *El poder de la gran burguesía*, Ediciones de Cultura Popular, México, 1979; Cristina Puga, “Dos proyectos de la burguesía mexicana”, en *Iztapalapa*, año 1, núm. 1, México, julio-diciembre de 1979; Cristina Puga, “Dos proyectos de la burguesía mexicana”, en *Iztapalapa*, año 1, núm. 1, México, julio-diciembre de 1979, y Carlos Arriola, *Los empresarios y el Estado*, SEP, Sep. 80 núm. 3, México, 1981.

de todos los tamaños: gigantes, grandes, medianas y pequeñas.

Pese a su gran heterogeneidad, hay sin embargo algo que los caracteriza de modo muy global: en general se han desarrollado (debido a diferentes factores, como su ubicación geográfica distante del centro) con una relativa autonomía respecto al gobierno. A esto seguramente obedecen algunos marcados elementos anticentralistas y antiestatistas de su ideología. Otro elemento que ilumina también la caracterización general de esta facción radical es el reciente y creciente peso de los empresarios cuya orientación básica tiende cada vez más hacia el mercado externo y las exportaciones.

Las organizaciones empresariales que articulan a esta facción han sido tradicionalmente la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que sin lugar a dudas ha sido siempre su bastión fundamental, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) y los centros patronales y cámaras de comercio locales que se federan en cada una de aquéllas. Cabe hacer notar que en los últimos quince años en la facción radical se ha desarrollado una tendencia a atraer a sus posiciones a otras organizaciones de bases locales: las delegaciones de provincia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), agrupación nacional de los moderados que tradicionalmente había rivalizado con los radicales. Se trata pues, en el caso de las organizaciones principales de los radicales, de agrupaciones de bases locales cuya estructura orgánica descentralizada facilita que las posiciones de los empresarios de provincia tengan en ellas canales fluidos de expresión.

Otros datos importantes relativos a esta facción atañen sobre todo a su organización básica: la Coparmex. Se trata del carácter relativamente reducido de sus bases (aproximadamente 18 000 empresarios adscritos a 51 centros patronales), al carácter libre de la adhesión de los afiliados a la agrupación (en contraste con las organizaciones de afiliación obligatoria) y al control que ejercen en ella los empresarios ligados a grandes y muy grandes empresas y grupos económicos.

La posición político-ideológica de los radicales hace que a esta facción le cuadre el nombre con que aquí se le designa. Son los portadores históricos de una posición político-ideológica muy antiestatista y anticentralista que desde hace mucho tiempo los ha ubicado en oposición a algunos elementos esenciales de la ideología y la política del gobierno: la intervención directa en la eco-

nomía y el corporativismo del Estado, la reglamentación de las actividades productivas, la reforma agraria y el sistema ejidal, el sindicalismo político y el discurso nacionalista y reformista.

Esta vieja oposición se ha redefinido y profundizado en los tiempos actuales, hasta derivar en una postura que declara definitivamente agotado al modelo económico y político y demanda “cambiar el sistema” efectuando una gran apertura económica y política. En lo económico ésta debería conducir a la liberación prácticamente total de “las fuerzas del mercado”, liquidando los controles y regulaciones y desmantelando a casi todas las empresas estatales que integran el sector público.

En lo político son ellos quienes con mayor vigor convocan al empresariado y a la ciudadanía a la acción política para dar efectividad a la autonomía de las entidades federativas, la separación de poderes, el régimen de partidos y las elecciones. Sus vínculos con el PAN y sus pujas en favor del bipartidismo PRI-PAN se han puesto nuevamente en evidencia en los últimos años, pero no por ello dejan de presionar al gobierno y al PRI para que cedan mejores espacios a empresarios, aunque sean priístas.

La otra gran facción política empresarial, la de los “centrales moderados” (en adelante simplemente moderados), tiene sus bases sobre todo en la zona metropolitana del valle de México, aunque existen grupos acordes con ella en muchos otros lugares del país.

Estas bases son mucho más homogéneas que las de la otra facción, pues aunque también la conforman una gran cantidad de empresas de tamaños muy variables que van desde las microempresas hasta los conglomerados gigantescos, en su gran mayoría son industriales, industriales que tradicionalmente han recibido gran protección del gobierno y por lo mismo han desarrollado una relativa dependencia respecto a él. A esto puede deberse su pragmatismo político, su aceptación de un cierto grado de intervencionismo estatal y sus vínculos con el PRI.

Las más importantes organizaciones en torno a las cuales se articula la facción de los moderados son la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Canacintra, entidades enormes con estructuras orgánicas muy centralizadas, sobre todo la primera, en las que generalmente predominan los puntos de vista de los industriales del valle de México que casi siempre las controlan. Otros rasgos distintivos de estas dos organizaciones son, además del carácter masivo de sus bases, la obligatoriedad legal

de la afiliación de los industriales a ellas y el peso no despreciable que tienen los empresarios medianos en sus órganos de dirección.

En los últimos años se han desarrollado en estas agrupaciones dos tendencias importantes; por una parte, en la Concamin los medianos industriales han ido ganando mayores espacios.⁷ En la Canacindra, por otra parte, los empresarios de provincia han dado a las delegaciones una mayor autonomía y han ejercido con relativo éxito presiones encaminadas a descentralizar su organización, dando a las delegaciones de provincia, que frecuentemente asumen posturas similares a las de los radicales, una mayor intervención en la toma de decisiones. Por ello no es raro encontrar discrepancias políticas entre la Canacindra nacional y algunas de sus delegaciones locales.

Las posiciones político-ideológicas de la facción moderada justifican el nombre con que aquí se le identifica. Históricamente han evolucionado de un apoyo amplio, aunque más bien implícito y difuso al viejo modelo económico y político, al reconocimiento de la necesidad de cierta apertura económica y política gradual. En lo económico sostienen que es conveniente una lenta y gradual apertura al exterior, que estimule a la industria para hacerla más competitiva en los mercados internacionales, pero que le permita resistir la competencia extranjera. También demandan una reducción de la intervención que ejerce el Estado en la economía y en la imposición de regulaciones a la actividad económica.

En lo político los moderados se pronuncian también, aunque con menos convicción que los radicales, porque la ciudadanía y los empresarios aumenten su participación en la actividad política y en el fortalecimiento de la sociedad civil. En ello ven la posibilidad, deseable pero lejana, de que se generen algunos mecanismos moderadores del sistema. Pero por lo que realmente se inclinan es por un incremento sustancial de las posiciones empresariales en el PRI y en el gobierno, que les permitan participar de manera aún más decisiva en las tareas de planeación del desarrollo y en la formulación de las políticas públicas. En torno a estos objetivos han planteado, aunque de manera no muy abierta, debido a la impopularidad del asunto, su intención

⁷ Esto se advierte en el acceso en los últimos años a la presidencia de Concamin de industriales como Jacobo Zeidenweber, Silvestre Fernández Barajas y Vicente Bortoni.

de constituir un sector empresarial del partido oficial, y que de modo claro se les reconozca como actor político legítimo.

Sus ligas con el PRI no les impiden ver con simpatía el fortalecimiento del PAN y de sus adláteres radicales en él, pues han advertido que las presiones políticas de éstos tienen el efecto de moderar algunas políticas oficiales que no son de su agrado y además son funcionales a sus designios de ocupar mejores posiciones en el PRI y en el gobierno. Es por esto que los moderados también favorecen la alternativa de un futuro bipartidismo PRI-PAN.

Empresarios panistas y priístas

En cuanto a las relaciones históricas de las facciones empresariales con los partidos políticos, cabe repetir que tradicionalmente los empresarios habían evitado hacerse claramente visibles en los partidos políticos y su manera de hacer política era más bien cular y secreta. Sin embargo, esta regla de acción política fue rebasada en el pasado, a resultas de coyunturas de conflicto como las que suscitaron las iniciativas reformistas, de muy diferente intensidad, de los gobiernos de Cárdenas, López Mateos y Echeverría.⁸ Al ocurrir estos conflictos los empresarios propendieron a acercarse a los partidos políticos de maneras y en grados diferentes. Cuando los conflictos cesaron, su tendencia fue abandonar los partidos y volver a las viejas reglas.

Sin duda la reacción ante el reformismo cardenista fue una de las más interesantes ocasiones de politización e incidencia de los empresarios en los partidos políticos. Las facciones empresariales se hicieron entonces visibles (quizá por primera vez) en la escena política: los radicales de manera muy clara, los moderados discretamente. Los primeros para engrosar el movimiento almazanista y auspiciar la fundación del PAN, mientras que los segundos se agregan a la candidatura de Ávila Camacho.

Llama la atención que pese a lo enconado de la lucha electoral, las plataformas políticas de las candidaturas de Almazán y Ávila Camacho tenían notables semejanzas, haciendo clara ya entonces una estrategia que en cada enfrentamiento, con la exac-

⁸ Sobre los conflictos del pasado, entre los empresarios y el gobierno, véase Juan Manuel Martínez Nava, *Conflicto Estado-empresarios en los gobiernos de Cárdenas, López Mateos y Echeverría*, Nueva Imagen, México, 1984.

titud de un reloj, volverá a repetirse siempre: el gobierno y su partido tratan de neutralizar a la derecha y a los empresarios mimetizándose con ellos.

Instalado en el poder el presidente Ávila Camacho, la politización empresarial comienza a refluir pero es todavía bien perceptible a mediados de la década. Los radicales, enfrascados en una lucha contra el sindicalismo político y el derecho de huelga, siguen activos en el PAN y en 1946 llevan al banquero regiomontano Antonio Rodríguez a la Cámara de Diputados.

En cambio, los moderados firman en 1945 el Pacto Obrero Industrial y acceden al gobierno. Algunos, como el secretario de Economía Gustavo P. Serrano (ex presidente de una asociación de empresas mineras), se convierten en funcionarios de Ávila Camacho; pero es con Miguel Alemán cuando un nutrido grupo de ellos aparece en el gabinete presidencial: los ex dirigentes de la Concamin Antonio Ruiz Galindo, secretario de Economía, y Agustín García López, secretario de Obras Públicas; los ex dirigentes de la Asociación de Banqueros de México Manuel Gual Vidal, secretario de Educación Pública, y Carlos Novoa, director del Banco de México; el industrial Antonio J. Bermúdez, director de Petróleos Mexicanos, y el transportista Antonio Díaz Lombardo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, en 1946 se creó la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad que desde su nacimiento se afilió al sector popular del PRI.

Con la consolidación del alemanismo y su conocida política de aliento a la empresa privada y de control de los sectores populares, los empresarios completaron su proceso de despolitización y dieron entonces a su actuar político los rasgos típicos de asunto cupular y secreto que lo caracterizarían durante largo tiempo, casi sin interrupciones.

Una de estas interrupciones, estimulada por los ambiguos aires reformistas que soplaban a principios del gobierno del presidente López Mateos, condujo de nuevo a los empresarios a la escena política y a los partidos. Aliados con el PAN y la Iglesia los radicales alentaron un movimiento de derecha, de muy amplio espectro, que se identificó en la combativa proclama "¡cristianismo sí, comunismo no!"

Los moderados mostraron no estar muy unidos. Una parte de ellos, encabezada por la Canacintra, apoyó el reformismo. Otra, con peso en la Concamin, además de coincidir con los ra-

dicales en la célebre inserción de prensa del 24 de noviembre de 1960 —en que se interpelaba al Presidente de la República si su gobierno se proponía conducir al país al socialismo—, se hizo presente en el PRI, amparándose en la figura del ex presidente Alemán (para entonces convertido en un próspero magnate) y el llamado Frente Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria, para detener el reformismo y presionar en la designación del sucesor presidencial.

La contención del reformismo y el nombramiento de Gustavo Díaz Ordaz como candidato del PRI a la presidencia de la República, tuvieron el efecto de apaciguar a los empresarios y debilitar otra vez sus vínculos partidarios.

En el sexenio del presidente Echeverría, como se mencionó, los empresarios volvieron nuevamente a politizarse de manera muy notable, y fortalecieron otra vez sus nexos político partidarios.

Los radicales volvieron a hacer sentir el peso de sus posiciones en el PAN por medio de un grupo de líderes encabezado por José Ángel Conchello y Pablo Emilio Madero, quienes a lo largo de sus carreras han estado muy estrechamente ligados a los grandes grupos empresariales de Monterrey.⁹

Del lado de los moderados, la Canacintra (uno de cuyos presidentes en aquel tiempo era un militante priísta) apoyó el discurso nacionalista del gobierno hasta que a fines del sexenio, en un ambiente caracterizado por la exacerbación del conflicto entre los empresarios y el gobierno, un movimiento interno en las delegaciones del norte colocó en la presidencia nacional de la agrupación a un seguidor de la línea radical. También en ese sexenio se produjo la renuncia forzada de un presidente de la Coparmex que durante el periodo de languidez que indujo la paz del diazordazato, había derivado por su cuenta hacia posiciones nacionalistas como las del gobierno y hasta estableció vínculos con el PRI. Otra liga entre los moderados y el partido oficial se hizo patente cuando un líder de pequeños comerciantes agrupados en la Concanaco denunció que ésta sólo hablaba por los intereses del gran comercio y amenazó con la escisión para ingresar después al sector popular del PRI.¹⁰

⁹ Pablo Emilio Madero fue un alto ejecutivo del Grupo Vitro de Monterrey y presidente de la Asociación Latinoamericana de Fabricantes de Vidrio. José Ángel Conchello prestó sus servicios en la Concamin y presidió la Asociación Nacional de Anunciantes.

¹⁰ Los líderes empresariales aludidos son: José Terrones Langone y Joaquín Pría

Otro buen indicador de las inquietudes empresariales de entonces fue la polémica centrada en la cuestión de si los empresarios podían o no ingresar al PRI, que en ese momento jefaturaba Jesús Reyes Heróles, antiguo asesor de la Canacintra. El debate en torno a la posibilidad de que se estableciera un "sector empresarial" del partido oficial concluyó con el veredicto de Reyes Heróles de que sólo podrían ingresar a ese partido los pequeños y medianos empresarios nacionalistas. Como secuela de ese episodio quedó una Liga de Empresarios Nacionalistas del PRI, que llevaría después a varios destacados hombres de negocios regiomontanos a la Cámara de Diputados.

Al final del sexenio de Echeverría y el inicio del de López Portillo los empresarios discutieron las modalidades y alcances de su actividad política, proponiendo algunos incluso, ya bajo la perspectiva de la reforma política lopezportillista, nada menos que la creación de un partido empresarial. Pero las inquietudes políticas empresariales volvieron a calmarse otra vez, cuando la "bonhomía" de López Portillo y la euforia petrolera sepultaron bajo las grandes ganancias los resquicios de desconfianza.

Empresarios militantes hoy

El presidente De la Madrid inició su gobierno ofreciendo a los empresarios poner en práctica la política económica "realista" que le demandaban; así, se reprivatizó el 34% de la banca recién expropiada, se impusieron taxativas legales que impedirán en el futuro la nacionalización de nuevas ramas de actividad sin la intervención del Congreso; se dio reconocimiento constitucional a la participación del sector privado en la planeación del desarrollo y se prometió que las empresas propiedad de los bancos serían devueltas y que se indemnizaría pronta y jugosamente a los banqueros expropiados. Pero también, por otro lado, el nuevo gobierno confirmó que el servicio de banca sería prestado exclusivamente por el Estado y elevó al rango constitucional un conjunto de nuevas disposiciones que redefinen la economía mixta, dando al Estado la atribución de rectoría de la economía y reco-

nociendo, además de los sectores público y privado, al “sector social”.

Los empresarios, sobre todo los radicales, rechazaron esas bases para la redefinición de la alianza y se lanzaron a la acción política abiertamente, con un enérgico y sonoro discurso que les permitió impactar a la opinión pública y acaparar la voz empresarial, dando en gran parte la impresión de que todo el empresario apoyaba su posición.

Esto porque a pesar de que la expropiación de la banca fue vista por los moderados como una medida extrema e irreversible, pero de la que podían beneficiarse, las posiciones de los radicales que la condenaron ruidosamente fueron en buena parte presentadas ante la opinión pública como las de todo el sector privado.

Un proceso similar se produjo luego con todo el discurso político global de los radicales, pues a pesar de que no era el único de los empresarios, sí logró prevalecer en el espacio de la opinión pública, de modo tal que el bajo perfil de las posiciones de los moderados hizo que parecieran ser más marginales de lo que realmente son.

Volvió así a tomar curso, como en otros conflictos del pasado, un proceso en el que los empresarios radicales acaparan la voz de la representación empresarial ante la opinión pública y llevan la iniciativa.

Los neopanistas

Un factor fundamental de reforzamiento de la acción de los radicales fue que su enérgica convocatoria a la acción política de la ciudadanía y de los empresarios mismos, tuvo una rápida y gran acogida en amplias capas de la población.

En efecto, el insistente y agresivo discurso que los radicales comenzaron a emitir en las reuniones “México en la libertad”, tuvo anchas resonancias y caló hondo en una sociedad que devastada y agraviada por la profundidad de la crisis económica, se interrogaba sobre sus causas. Con suma rapidez pudieron los empresarios y sus aliados contrarrestar la explicación presidencial de la crisis y la cuota de legitimidad popular que la expropiación bancaria había ganado para el gobierno.

En pocas semanas se difundió un contradiscurso que implantó como sentido común en amplios sectores de la población una ex-

plicación de la crisis reducida a la corrupción y a la ineptitud del gobierno y de la burocracia política. Factores éstos que —completa más elaboradamente la explicación de los radicales— tienen sus causas más profundas en el concentradísimo poder presidencial, el acusado intervencionismo estatal, la precariedad de la república liberal y la falta de participación de la sociedad civil.

Los principales hacedores/receptores de este nuevo sentido común que exime de toda responsabilidad de la crisis a los empresarios, han sido en buena parte los sectores medios urbanos, frustrados en sus expectativas de consumo y temerosos de proletarizarse. No son, sin embargo, ajenas al mismo fenómeno, aunque en menor grado, algunas capas de los sectores populares. Como ya se había vislumbrado en otras coyunturas del pasado, los nuevos tiempos confirman el lugar crucial que ocupan los desorganizados y difusos sectores medios y el estratégico peso de los medios de comunicación masiva en la formación y movilización de la opinión pública.

Pero en lo profundo de este proceso de implantación de las versiones parciales de la crisis está, por un lado, el agotamiento del discurso oficial, la falta de credibilidad en el PRI, la cada vez más deteriorada legitimidad del gobierno y el cuestionamiento de la hegemonía de la burocracia política. Por otro, la convergencia de un amplio espectro de fuerzas y actores heterogéneos por sus bases, diversos en cuanto a los agravios que mientan y complejos en sus interrelaciones, cuyo principal catalizador es el discurso contra la corrupción, el gobierno y el PRI y una demanda ubicua de democratización y descentralización. La conjunción de estos fenómenos ha propiciado una correlación de fuerzas favorable a los empresarios de ambas facciones y a toda la derecha en general.

En el desarrollo de estos procesos también participaron activamente la Iglesia y el PAN, que con su reprobación de la nacionalización bancaria llevaron su convergencia al punto de convertirla en una virtual alianza con los empresarios radicales.

Esta alianza ha sido facilitada en parte porque los tres actores declaran, con diferentes énfasis, su adhesión a la doctrina social de la Iglesia, la cual amalgama la filosofía neotomista con las tesis del liberalismo y algunos principios corporativistas, en una síntesis cuyos conceptos fundamentales son la persona humana, los derechos naturales, las sociedades intermedias, el bien común y el Estado subsidiario.

La Iglesia, además, había estado exigiendo de tiempo atrás un conjunto de derechos que ahora, con redoblada insistencia, alega que le deben ser reconocidos. El otorgamiento de éstos implicaría un cambio profundo del estatus jurídico-político de la institución y posiblemente tendría importantes consecuencias en el sistema político nacional.

En el PAN el neopanismo consolidó su prevalencia desde la segunda mitad de los setenta, marginando a otras corrientes internas como el solidarismo de tintes socialcristianos que floreció en los sesenta e inicios de los setenta y el conservadurismo liberal de la vieja guardia fundadora. El discurso del neopanismo triunfante es en buena parte un neoliberalismo empresarial que se identifica plenamente con los planteamientos económicos de la facción radical,¹¹ y en su versión cotidiana y callejera es un discurso antigubernista sustentado en las denuncias de la corrupción, el fraude electoral y la demanda de democracia electoral.¹²

Fortalecida con estos aliados virtuales, la facción radical rechazó las bases que la burocracia política ofrecía a los empresarios para redefinir la alianza, continuó en su oposición y se lanzó decididamente a la arena político electoral.

De ese modo, a lo largo del periodo de gobierno del presidente De la Madrid un numeroso contingente de empresarios y líderes de las organizaciones de la facción radical, se ha visto involucrado, a través del PAN y con el apoyo de la Iglesia y las simpatías del gobierno y la opinión pública de los Estados Unidos, en las campañas y en las elecciones de varios estados de la república: Chihuahua, Durango, Baja California y Puebla en 1983; Coahuila en 1984; Sonora, Nuevo León y San Luis Potosí (elecciones de diputados federales) en 1985, y Chihuahua y Sinaloa en 1986.¹³

¹¹ Sobre la ideología neopanista, véanse las excelentes entrevistas realizadas a varios líderes panistas por Annelene Beatrice Sigg Carrero, *Crisis y estrategia política: el caso del Partido Acción Nacional*, tesis, Universidad Iberoamericana, México, 1985.

¹² El discurso callejero del neopanismo chihuahuense se condensaba en la ecuación: "PRI + gobierno + corrupción = causantes de la crisis", según Alberto Aziz Nassif, *Chihuahua y los límites de la democracia electoral*, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, mecanografiado, enero de 1987, p. 25.

¹³ En torno a algunos de estos procesos electorales y la participación de los empresarios en ellos véanse: Alberto Aziz Nassif, *op. cit.* y "La coyuntura de las elecciones en Chihuahua 1983", en C. Martínez Assad (coord.), *Municipios en conflicto*, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y G.V. Editores, México, 1985; Alberto Aziz

En todas estas contiendas la facción radical desempeñó un papel muy visible al suministrar al PAN en varias ocasiones los candidatos a los cargos de elección popular en disputa o como fuerza activa en apoyo de aquéllos.¹⁴ Además la tesis empresarial de excluir a sus organizaciones de la política partidaria fue transgredida bien por la intervención de las agrupaciones en apoyo directo al PAN (o al PRI) y sus candidatos, bien porque las intervenciones en “lo político” adquirieron tal intensidad que acabaron por transmutarse en intervenciones en “la política”.

El más disputado de todos los procesos electorales mencionados fue sin duda el de Chihuahua en 1986. En su desarrollo se produjeron dos alineamientos: el de los grandes empresarios con la candidatura oficial y el de las organizaciones empresariales locales y los pequeños y medianos empresarios con la del candidato panista.¹⁵ Un hecho remarcable, porque no tiene precedentes, fue la convocatoria y realización de manifestaciones y paros empresariales de protesta por las irregularidades cometidas en el desarrollo de los comicios y en demanda de que se les declarase nulos.¹⁶

Y aunque finalmente los panistas fueron declarados oficial-

Nassif, “Neopanismo y neopriísmo en Chihuahua”, ponencia presentada al I Encuentro Nacional sobre los Empresarios y las Empresas de México, Xalapa, Ver., mayo 8-9 de 1986; Graciela Guadarrama, “Empresarios y política: Sonora y Nuevo León, 1985”, en *Estudios Sociológicos*, vol. 5, núm. 13, enero-abril de 1987, y “El proceso electoral en Sonora y Nuevo León”, ponencia presentada al I Encuentro Nacional sobre los Empresarios y las Empresas de México, Xalapa, Ver., mayo 8-9 de 1986; Teresa Incháustegui, “Los empresarios y el proceso político electoral”, ponencia presentada al I Encuentro Nacional sobre los Empresarios y las Empresas de México, Xalapa, Ver., mayo 8-9 de 1986; Carlos Moneada, “El escenario político de Sonora”, en C. Martínez Assad (coord.) *op. cit.*; Elsa Patiño Tovar, “El movimiento empresarial en Puebla: 1973-1984”, ponencia presentada al I Encuentro Nacional sobre los Empresarios y las Empresas de México, Xalapa, Ver., mayo 8-9 de 1986; y Marco A. Rascón y Patricia Ruiz, “Chihuahua: la disputa por la dependencia”, en *Cuadernos Políticos*, núm. 47, julio-septiembre de 1986.

¹⁴ Algunos de los empresarios neopanistas más destacados son los siguientes: L. H. Álvarez, Amaya, Arronte, Barrio Terrazas, Basagoiti, Canales Clariond, Cañedo, Castelo Parada, Clouthier del Rincón, Coindreau, Conchello, Corral Ávila, J. Chapa, Del Rincón, Elorduy, Goicochea, Gurza, Havs, Ortega, López Rocha, Luján, Madero, Rice, Rosas López, Andrés Sada Z., Rogelio, Sada Z., Sandoval, Terán, Villarreal y Villa Escalera.

¹⁵ Así lo detectó personalmente el autor en entrevistas realizadas a líderes empresariales en Chihuahua en junio de 1986.

¹⁶ Las manifestaciones y paros empresariales se realizaron los días 10 y 14 de julio y del 30 de julio al 1 de agosto de 1986. En algunos periódicos como *Excelsior* del 11 de julio se mencionan 2 000 empresarios manifestantes y 50% de establecimientos industriales y comerciales cerrados en la ciudad de Chihuahua.

mente derrotados en los comicios, ganaron sin embargo algo de gran peso ideológico-político: arraigar en la opinión pública nacional la convicción de que al menos en Chihuahua se les había derrotado por medio del fraude electoral.

El reciente ascenso de los neopanistas, encabezados por el industrial chihuahuense Luis H. Álvarez, a la dirección nacional de su partido hace suponer que este aguerrido grupo de norteños, fogueados en las tácticas de la desobediencia civil, está muy dispuesto a dar una gran pelea en contra del PRI y del gobierno en las elecciones federales de diputados, senadores y Presidente de la República en 1988. A la cabeza estará, muy probablemente, un candidato presidencial de claros antecedentes empresariales.

Los neopriístas

Los moderados, siguiendo su tradición de negociación en las entretelas del sistema político, han aparecido también en el escenario electoral, pero como les es característico, de manera más velada y ocultando incluso su condición de miembros del sector privado.

Es posible apreciar y seguir la línea de conducta política pública de los moderados y sus organizaciones, la cual los acerca al partido oficial en busca de mejores posiciones y que se manifiesta en la frecuente presencia de sus líderes en los actos del PRI, su ocupación de puestos en los CEPES y el IEPES de ese partido y el replanteamiento, hecho explícito en la decimosegunda asamblea del PRI en 1984, de la posibilidad de crear un sector empresarial en ese partido.

Sin embargo, en general esta facción opta más bien por la presión secreta e interna dentro del gobierno y el partido en favor de las candidaturas de empresarios, rentistas, propietarios priístas o de políticos identificados con sus posiciones. Si no tiene dichas candidaturas, entonces negocia apoyos, prebendas y posiciones en el nuevo gobierno. Y cuando estas negociaciones tienen éxito normalmente se produce la "cargada" empresarial, es decir, grandes y frecuentes manifiestos y actos de apoyo al candidato oficial.

Este tipo de negociaciones ha tenido un éxito muy ostensible en las figuras de los candidatos priístas que contendieron en algunas de las elecciones más disputadas en los estados del nor-

te. Tanto Rodolfo Félix Valdés como Jorge Treviño Martínez y Fernando Baeza Meléndez, gobernadores de Sonora, Nuevo León y Chihuahua, son priístas muy identificados con las élites empresariales de sus estados, lo que en gran medida ha quedado confirmado con la integración de sus gabinetes.¹⁷ En otro tiempo, muy probablemente, sus candidaturas hubieran dejado plenamente satisfechos a los radicales, pero sucede que ahora éstos esperan ganar una gubernatura desde la oposición panista, calculando que un triunfo de esta índole modificaría mucho más aún la correlación de fuerzas en su favor.

El éxito de las presiones en favor de estos neopriístas es efecto de un movimiento dialéctico que suscita la contradicción entre las facciones empresariales, en el marco de una correlación de fuerzas de por sí favorable a la derecha, que convierte a los empresarios en el interlocutor privilegiado del gobierno. Este movimiento se desarrolla así: en la medida en que la facción radical se identifica con el PAN y éste lanza candidaturas de empresarios que logran concitar un amplio apoyo de la ciudadanía, el gobierno y el PRI tratan de neutralizarlos, designando también a candidatos del mismo corte (los neopriístas) o a políticos bien identificados por sus posiciones proempresariales. En este último sentido pueden interpretarse la retención y el regreso de políticos como Alfonso Martínez Domínguez, Luis M. Farías, Guillermo Jiménez Morales, Alfonso Corona del Rosal y Carlos Hank González.

El PAN ha logrado implantarse en algunas regiones del país, convirtiéndose ahí en un serio rival que a veces hasta lleva la iniciativa e influye en las decisiones del PRI. El PRI y el gobierno parecen colocados a la defensiva, promoviendo y cediendo espacios a su ala derecha y tomando resoluciones precipitadas como el cambio de la dirección nacional del PRI para asegurar el control del partido hasta resolver el "destape", la costosa rehabilitación política de Echeverría y López Portillo en aras de dar la impresión de unidad partidaria y los intentos de marginar drásticamente a los miembros de la llamada corriente democrática.

¹⁷ Véase la información sobre la integración de los gabinetes de los gobernadores con muchas personas venidas del sector privado y con ex funcionarios de gobiernos estatales muy identificados con posiciones empresariales. Para Chihuahua: *Proceso*, núm. 518, 13 de octubre de 1986, pp. 10-13; para Nuevo León: *El Norte*, Monterrey, 2 de agosto de 1985; para Sonora: *El Imparcial*, Hermosillo, 14 de septiembre de 1985 y *Proceso*, núm. 493, 14 de abril de 1986, pp. 20-23.

Conclusiones

En la medida en que la izquierda no logre implantarse bien como una opción política viable y continúen declinando la hegemonía burocrática, la legitimidad del gobierno y la credibilidad del PRI, la correlación de fuerzas seguirá siendo, al menos a corto plazo, favorable a la derecha.

Esta correlación de fuerzas, aunada a la dialéctica de las facciones y su incidencia en el PAN y el PRI, continuará favoreciendo las candidaturas de neopanistas y neopriístas, de tal modo que la propia sucesión presidencial estará marcada por estos procesos.

Es así que, pese a lo enconado que puedan llegar a ser el destape priísta, las campañas y los comicios del año entrante, tal vez nunca como ahora estará tan cerca de la presidencia de la República un candidato identificado con los empresarios.

Cabe señalar aquí, sin embargo, que pese al vigor de su embate, los empresarios tienen en realidad poca oportunidad de constituirse en el grupo social hegemónico de la sociedad mexicana, porque aunque cuentan con una parte importante de los sectores medios, las grandes masas de pobres rurales y urbanos están muy lejos de compartir sus valores y su visión del mundo, además de que sus proyectos de desarrollo del país no prevén beneficios materiales significativos para estas mismas masas.

Sí parece posible, en cambio, que el fuerte desgaste de la hegemonía burocrática y el enérgico desafío de los empresarios puedan producir a éstos, a corto plazo, mayores cuotas de poder, pero sin hegemonía. Pero un triunfo de esta naturaleza tiene mucho de espejismo, pues el endurecimiento que acarrearía podría derivar en una situación tal que no sería remota la insurgencia de una tercera fuerza, esta vez de marcado signo popular, que desde dentro o desde fuera oponga a todo el sistema un nuevo y más drástico reto.

